



Presupuesto base cero debe reorientar gasto rural

Escrito por: Imagen Agropecuaria Fecha: mayo 01, 2015 Sección: Agronegocios, Financiamiento, Política Agrícola No hay comentarios

PEC destina 20% a fomento productivo; reevaluar apoyos a comercialización.

La decisión del gobierno federal de establecer un presupuesto con base cero en el ejercicio 2016 es una gran oportunidad para que organizaciones sociales y campesinas cabildeen y consigan una reorientación de los recursos públicos destinados al medio rural –en particular los asignados a fomento productivo-, con dos objetivos: impulsar fórmulas de desarrollo rural integral para los productores de pequeña escala (que tienen menos de cinco hectáreas) y apoyar el latente potencial productivo de los de mediana escala (entre cinco y 20 hectáreas).

Así lo considera Ana Joaquina Ruiz Guerra, experta en temas de transparencia, de desarrollo rural y subsidios agrícolas, aunque reconoce que el presupuesto base cero en principio representa un recorte presupuestario –en el marco actual de conflicto económico y austeridad-, y es muy posible que tal recorte ocurra en las áreas donde se genere menor protesta social, y que al mismo tiempo se mantenga la condición inercial en el conjunto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC).

El PEC opera como un anexo técnico del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) e involucra los recursos etiquetados formalmente para el medio rural y que se ejercen desde 13 secretarías de Estado, así como desde otros organismos públicos como los Tribunales Agrarios y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). En 2014 el Congreso de la Unión aprobó 338 mil 669.9 millones de pesos para el PEC; en el transcurso del año se hicieron recortes por 10 mil 817.1 millones, y al final del año el ejercicio efectivo fue de 319 mil 484.8 millones. Para 2015 el recurso aprobado por el Congreso es de 353 mil millones, de los cuales 20.6 por ciento corresponde a fomento

productivo. El PEC involucra diversas vertientes (salud, infraestructura, educación, administrativa, social, agraria, financiera, competitividad, laboral y medio ambiente).

La entrevistada, la autora del estudio *Presupuestos para la agricultura familiar en México*, junto con Héctor Robles Berlanga, editado por Oxfam y CRECE en 2012, explicó que ella y otros expertos en el tema “desde hace muchos años hemos venido diciendo que debe replantearse el presupuesto para el campo con un enfoque más al apoyo a la productividad de los productores pequeños y con un recorte de los grandes subsidios que se dan a las corporaciones. Pero hemos encontrado oídos sordos.

“La única respuesta ha sido que PROSPERA (antes Progres-Oportunidades, el principal programa de combate a la pobreza) tiene ahora un enfoque de productividad, pero no hay un aumento sustancial de sus recursos presupuestarios para integrar a los productores pequeños en una estrategia de desarrollo rural integral, esto es una estrategia que ofrezca a la población en condición de pobreza y pobreza extrema apoyos que aumenten efectivamente sus capacidades productivas, un apoyo semilla para que tengan mayores recursos, de forma paralela a los apoyos para mejorar sus condiciones de salud, de educación, de alimentación, en general sus condiciones de vida. Para todo esto se requieren apoyos integrales, no pulverizados y una estrategia real para salir de la pobreza en el corto, mediano y largo plazos”.

Ruiz Guerra, profesora de la UNAM y ex colaboradora de Fundar-Centro de Análisis e Investigación, consideró que “el PEC se maneja de forma perversa, hay lo que llamamos

demagogia presupuestal. Esto es, en los años recientes es común que el Ejecutivo Federal presente una propuesta de PEC con recortes, y después de negociaciones, los diputados anuncien con gran gala que el PEC se ha sostenido al alza y que no dejarán que se pierdan los recursos del campo. Pero eso que llaman recursos para el campo termina siendo infraestructura, educación, esto y aquello, incluso ahora algo de energía, y esto no es estrictamente el desarrollo rural, como lo concibe la Ley de Desarrollo Rural Sostenible.

“Lo que debemos hacer ahora es inducir que las secretarías de Estado trabajen desde un enfoque integral y orienten los recursos de fomento productivo hacia los pequeños y medianos productores (...) Si tienes Procampo (hoy llamado Proagro), que es el gran programa de apoyo al campo, limitar sus pagos a 20 hectáreas por productor.

“En cuanto a los apoyos a la comercialización, yo digo que habría que reevaluarlos, porque en un periodo de austeridad como el que se ve venir, tendríamos que plantearnos a quién debemos apoyar. Reflexionar si vale la pena mejor invertir esos recursos en quienes tienen mayor potencial productivo, que son los pequeños y sobre todo los medianos productores. Y pensar en transformar otros apoyos, por ejemplo los que se dan para contratar coberturas de precios (en las bolsas internacionales), pues éstos requieren la intermediación de consultorías que terminan dañando a los pequeños productores pues les cobran comisiones muy altas”.

Ana Joaquina Ruiz consideró que el presupuesto base cero debe implicar también un replanteamiento de las reglas de operación de los programas del campo, porque su alta complejidad hoy día hace que sean los despachos los únicos capaces de “bajar” recursos, y “eso es parte de la perversidad del sistema”.

La entrevistada advirtió que “debemos tener mucho cuidado” pues podría replicarse lo que ocurrió en el gobierno de Vicente Fox, cuando se planteó también un presupuesto base cero. “Lo único que ocurrió entonces fue una demagogia presupuestaria. El asunto sirvió para cortar recursos a organizaciones y canalizarlos a grandes empresas y agroindustrias. Creo que ahora tendríamos que tener cuidado de que el presupuesto base cero signifique empezar a recortar recursos y después de las elecciones negociar el aumento mucho más clientelista de recursos. Imagino un escenario en que las organizaciones se empiecen a asustar y al final del día, en la negociación presupuestaria, vuelva la clase política a la demagogia de decir ‘no estamos recortando recursos para el campo’ y entonces meten dinero a infraestructura, hospitales, recursos educativos, etcétera, que no llegan a la población que debe y como debe de llegar”.

La experta dijo que, siendo éste un año electoral, va a ser complicado que la sociedad avance para lograr un presupuesto rural más justo. “Si queda una mayoría priista en el gobierno, no podremos ser tan optimistas. Más bien debemos tener mucho cuidado en que no haya un uso discrecional de los recursos, que no haya retrocesos en transparencia, y sigamos adelante con las propuestas de etiquetar más eficientemente los

recursos para el campo hacia la población con potencial productivo y hacia la población que más lo necesita”.

Ana Joaquina Ruiz es miembro del Grupo Diálogo Rural México, una iniciativa de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, que busca generar propuestas consensuadas entre representantes de diversos sectores de la sociedad (académicos, empresarios, representantes de organizaciones, políticos y funcionarios públicos) para incidir sobre las políticas públicas hacia el medio rural.

Ruiz consideró que el GDR es un grupo con muchísimo potencial y su composición e integración permiten avanzar con propuestas muy claras y puntuales de política pública para el sector rural, así como establecer lazos entre sectores importantes de la sociedad que le permitan plantarse frente al gobierno como un grupo integrado. “Esto es muy importante, sobre todo porque el sector rural ha sido abandonado en la discusión pública. La pobreza rural se ha puesto sobre la mesa, pero el tema del sector rural como tal ha sido bastante dejado de lado (...) Se habla de seguridad y soberanía alimentaria, pero la discusión de lo rural en su integralidad es percibida en el aparato público como vieja, no se le quiere abordar, aunque es un tema fundamental, porque tenemos a 25 por ciento de la población viviendo en el medio rural”.